

ACTA DE AUDIENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
MODALIDAD VIDEO CONFERENCIA

FECHA	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
RUC	19-4-0231388-1
RIT	O-85-2019
MAGISTRADO	FELIPE CANCINO CONCHA
ADMINISTRATIVO DE ACTAS	PAZ ROMAN ZAMORANO
HORA DE INICIO	13:03 HORAS
HORA DE TERMINO	13:04 HORAS
Nº REGISTRO DE AUDIO	1940231388-1-113
PARTE DEMANDANTE NO COMPARECIENTE	ANA MARIA GUERRERO PONCE, CI N° 7.642.085-8 , domiciliada en población Carol wojtyla el vaticano N° 492 Peumo
ABOGADO	PABLO SAN MARTIN CORNEJO pf.sanmar@gmail.com
PARTE DEMANDADA NO COMPARECIENTE	MUNICIPALIDAD DE PEUMO, RUT N° 69.080.900-1.
REPRESENTANTE LEGAL COMPARECIENTE	FERMÍN CARREÑO CARREÑO, CI N°10.238.592-6 , domiciliado en calle Carmen N° 33, comuna de Peumo.
ABOGADO	DANIELA MORAN VALDIVIA daniela.moranv@gmail.com

ACTUACIONES EFECTUADAS:	SI	NO	ORD
(HECHO DE HABERSE EFECTUADO O NO, Y SU ORDEN)			
• INDIVIDUALIZACION PARTES	X		1
• LECTURA DE SENTENCIA	X		2

San Vicente de Tagua Tagua, nueve de noviembre de dos mil veinte.

Visto, oídos y considerando:

PRIMERO: Individualización de las partes y síntesis de la demanda y sus fundamentos. Ha comparecido **Ana María Guerrero Ponce**, administrativa, domiciliada en pasaje El Vaticano 492, villa Karol Wojtyla, comuna de Peumo, demandando a la **Ilustre Municipalidad de Peumo**, representada por su alcalde, **Fermín Carreño Carreño**, ambos domiciliados en Carmen 33, de dicha comuna, solicitando que se deje sin efecto el



término de su relación laboral, ordenando su reincorporación, mientras no se le notifique en forma legal la resolución que acogió su solicitud de retiro voluntario, con costas.

Señala que ingresó a prestar servicios para la demandada en 1981, en calidad de auxiliar administrativo en la Posta La Rosa y, posteriormente, se desempeñó como Encargada de Finanzas del Departamento de Salud. Con la entrada en vigor de la ley 19.378 que establece el estatuto de salud municipal, el 13 de abril de 1995, su relación laboral pasó a ser estatutaria.

Agrega que postuló a la bonificación por retiro voluntario al personal de salud, establecido por la ley 20.919, y que al término de su relación laboral se encontraba en dicho proceso.

Sostiene que, desde el año 2015, sufrió hostigamiento de parte del alcalde, hasta que le fue quitada, arbitrariamente, la asignación especial del artículo 45 de la ley 19.378, que equivalía al 100% de su remuneración. En febrero de 2019, presentó una licencia psiquiátrica y se reincorporó al servicio el 30 de septiembre de ese año.

Afirma que jamás se le notificó el resultado de su postulación al bono de retiro, notificación exigida en el inciso final del artículo 3 de la ley 20.919, y que, sin embargo, al día siguiente de su reincorporación, fue notificada del decreto alcaldicio 1217 que aprueba y ordena pagar los fondos por su retiro voluntario. Posteriormente, debió firmar un término de la relación laboral en el que hizo reserva de las acciones que ahora ejerce.

En un otrosí de su presentación, demanda el pago de las prestaciones derivadas del artículo 45 de la ley 19.738, señalando que dicha asignación le corresponde, pues debe otorgarse según el nivel y la categoría funcionaria del personal, habiendo recibido, a junio de 2016, dicha bonificación por aproximadamente 20 años. Además, cobra las remuneraciones y asignaciones adeudadas y las que se devenguen hasta



su reincorporación, más la diferencia que debió pagarse en el bono de retiro, todo ello con reajustes, intereses y costas.

SEGUNDO: Contestación. La demandada pidió el rechazo de ambas acciones, con costas, señalando, en síntesis, que la Municipalidad ha cumplido las normas, respetando los derechos funcionarios y laborales de la demandante.

Afirma que la actora fue notificada, en la forma exigida en la ley, al correo electrónico que ella manejaba, el 17 de octubre de 2018, mediante el reenvío de un correo con el adjunto con la resolución exenta de 28 de septiembre de ese año que le favoreció con un cupo para la bonificación de incentivo al retiro. Conforme a lo señalado en ese correo, la actora habría presentado su renuncia, el 29 de octubre de aquel año.

Agrega que fue aprobado el convenio de transferencia de fondos y se pagó el bono por retiro voluntario, depositándose en la cuenta de la funcionaria la suma de \$21.920.116.

En cuanto a la bonificación del artículo 45 de ley 19.378, señala que recibirlo no es un derecho permanente de la actora, sino que se trata de un beneficio transitorio, cuyo otorgamiento es discrecional y se asigna en consideración a la disponibilidad de recursos y a las necesidades del servicio.

TERCERO: Se dio cumplimiento a los trámites esenciales del procedimiento. La causa llegó por inhabilidad de Jorge Parrague López, juez titular del Juzgado de Letras de Peumo, conociendo los jueces de este tribunal en su calidad de subrogantes.

El 20 de febrero de 2020, se llevó a efecto la audiencia preparatoria. El llamado a conciliación no prosperó.

Existiendo hechos controvertidos, se recibió la causa a prueba.

La audiencia de juicio se parcializó en dos jornadas, teniendo lugar la incorporación de la prueba documental el 19 de mayo y la confesional y



testimonial, el 21 de octubre de este año, oportunidad en que las partes hicieron sus observaciones a la prueba rendida, las que se han tenido presentes al momento de redactar esta sentencia.

Se pospuso la dictación de la sentencia para el día de hoy.

CUARTO: Determinación de la cuestión controvertida. No ha habido controversia respecto a las características de la relación entre las partes, de carácter estatutaria, regida por la ley 19.378 que establece el estatuto de salud municipal, ni respecto de su forma de terminación, mediante un documento suscrito para dicho efecto y el depósito del bono de retiro previsto en la ley 20.919.

Entonces, para la resolución de este asunto, será necesario, en primer lugar, determinar si la demandante fue o no notificada en forma legal de la resolución que le benefició con un cupo para retiro voluntario.

Además, deberá dilucidarse cuál es el efecto de que la actora no haya hecho efectiva su renuncia dentro del plazo legal ni se haya desistido por escrito de la misma.

Por otra parte, deberá resolverse si la demandante tuvo o no derecho a percibir la asignación especial del artículo 45 del respectivo estatuto, luego de que dejó de pagársele, en junio de 2016.

QUINTO: Breve síntesis del procedimiento para la obtención del bono de incentivo al retiro. El procedimiento para acceder a la bonificación por incentivo al retiro a los funcionarios de la atención primaria de salud municipal está regulado en la ley 20.919 y en su reglamento contenido en el decreto supremo 26 de 2016 del Ministerio de Salud.

El beneficio está establecido para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que sirven y que hagan efectiva su renuncia voluntaria, en los plazos y según las normas contenidas en esta ley y en el reglamento.



Se establece un total de 7.000 beneficiarios, repartidos en cierto número anual determinado de cupos, a los que los funcionarios deben postular, comunicando su intención de renunciar. En caso de haber un mayor número de postulantes que cupos disponibles, éstos son seleccionados según criterios de mayor edad, años de servicio, uso de licencias médicas y años en la administración del Estado.

La resolución que selecciona a los beneficiarios es remitida por la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los Servicios de Salud y éstos a los consultorios respectivos. Dentro de los cinco días siguientes hábiles a la fecha de dictación de la resolución, cada consultorio debe notificar personalmente a los funcionarios beneficiados.

Los beneficiarios deben informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos del consultorio la fecha en que dejarán el cargo, a más tardar el último día del mes siguiente al que se ha dictado la referida resolución. La fecha para hacer efectiva su renuncia voluntaria no podrá extenderse más allá de noventa días corridos luego de la oportunidad señalada precedentemente, o noventa días corridos luego de cumplidos 65 años.

Si un beneficiario decide desistirse de su renuncia, deberá hacerlo en el lugar donde realizó su postulación. Se entenderá que se desiste la funcionaria o el funcionario que no cumple con informar la fecha en que dejará el cargo dentro del plazo que se señaló en el párrafo precedente.

SEXTO: La demandante fue notificada de la resolución que acogió su postulación, mediante comunicación al correo institucional que manejaba.

La demandada ha acompañado la copia de un correo electrónico, dirigido a postaesperanza@gmail.com, en que el 17 de octubre de 2018, Patricia Pichuante Farías, contadora auditora y asesora del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Región de O'Higgins, al que se adjunta la resolución exenta 946 de la Subsecretaría de Redes



Asistenciales, de 28 de septiembre de ese año, que individualiza a los funcionarios que obtuvieron un cupo para acceder a bonificación por retiro voluntario. En dicha resolución aparece la demandante, Ana María Guerrero Ponce, beneficiada con el número 322.

Patricia Pichuante compareció, además, como testiga de la demandada y declaró, respecto de este punto, que efectivamente ella remitió dicho correo a la casilla ya mencionada y que le constaba que la actora utilizaba este correo institucional.

Por otra parte, en la carta remitida por la demandante el 29 de octubre de 2018 al jefe del Departamento de Salud de Peumo, Juan Carlos Fuentes Maldonado, se lee, con claridad, que conoce el contenido de dicha resolución, lo que, sumado a los antecedentes reseñados precedentemente, permite tener por establecido que el referido correo de 17 de octubre de 2018 constituyó la notificación a la actora de la resolución que le benefició con la bonificación al retiro voluntario.

Si bien tal comunicación se hizo ya vencido el término de cinco días hábiles establecido en el inciso quinto del artículo 3 de la ley 20.919 y a una casilla de correo que no fue solicitada por la actora como forma de notificación, según consta en el respectivo formulario de postulación, la existencia de la carta posterior y su contenido permite concluir que dicho acto comunicativo tuvo efecto y, por lo tanto, es válido.

SÉPTIMO: La demandante no hizo efectiva su renuncia dentro del plazo establecido en la ley y en el reglamento respectivos. En el inciso final del artículo 3 de la ley 20.919 se dispone que: “Los funcionarios y funcionarias que resultaren beneficiarios y beneficiarias de cupos deberán informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a la unidad que defina el consultorio respectivo, a más tardar el último día del mes siguiente a la fecha de dictación de la resolución a que se refiere el inciso segundo, la fecha en que dejarán definitivamente el cargo y del total de



horas que sirvan. Esta deberá hacerse efectiva a más tardar dentro de los noventa días corridos siguientes al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia definitiva o dentro de los noventa días corridos siguientes al cumplimiento de 65 años de edad, si esta fecha fuere posterior a aquella.”

Por otra parte, en los incisos primero y segundo del artículo 16 del decreto supremo 26 de 2016 del Ministerio de Salud, al que nos referiremos, en adelante, como el reglamento, se señala: “Los funcionarios y funcionarias que resultaren beneficiarios de cupos en la bonificación por retiro voluntario, salvo los indicados en el inciso segundo del artículo 2°, deberán informar por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a la unidad que defina el consultorio respectivo, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a la fecha de la resolución a que se refiere el artículo 12 de este reglamento, la fecha en que dejarán definitivamente el cargo y el total de horas que sirvan.

Esta fecha deberá hacerse efectiva a más tardar dentro de los noventa días corridos siguientes al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia voluntaria definitiva o dentro de los noventa días corridos siguientes al cumplimiento de 65 años de edad, si esta fecha fuere posterior a aquella.”

En la citada carta remitida por la demandante al jefe del Departamento de Salud de Peumo poco antes del cumplimiento del plazo para informar la fecha de su renuncia definitiva, que vencía el último día hábil del mes de octubre, señala, en lo pertinente, que “Presento renuncia correspondiente (...)”, sin indicar la fecha en que ésta se hace efectiva.

No puede, simplemente, entenderse que la renuncia rige desde la fecha en que se ha informado, pues ésta se ha presentado únicamente en razón de la obtención de la bonificación de incentivo al retiro y, tanto la ley como el reglamento citados, señalan que debe dejarse de prestar servicios “dentro” del plazo de noventa días corridos siguientes a la oportunidad en



que debía informarse tal fecha o “dentro” del plazo de noventa días corridos luego de cumplidos 65 años, que no es el caso. Es decir, la actora debió informar la fecha en que dejaría de prestar servicios, con precisión, y tal fecha debía enmarcarse en el plazo establecido para ello en la ley y el reglamento, el que necesariamente es posterior a la fecha límite para informarla.

Una interpretación en sentido contrario, además de insostenible, sería enormemente perjudicial para la trabajadora, pues ésta, que, según se aprecia en su certificado de nacimiento, al momento de entregar su carta, en 2018, había cumplido apenas 61 años, teniendo plazo para hacer efectiva su renuncia hasta noventa días corridos luego de cumplidos los 65 años, es decir, en el 2022.

La demandada, al parecer, ha advertido esta complicación, pues en el segundo párrafo de la tercera página de su escrito de contestación se hace cargo de aquello, aventurándose a concluir que “Si bien la demandante no informó (...) la fecha en que dejaría definitivamente el cargo y del total de horas que servía. Esta debería haberse hecho efectiva a más tardar dentro de los 90 días corridos siguientes al vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia definitiva, por lo que vencido el plazo su acción se encuentra prescrita (sic)”, conclusión que, como analizaremos en el motivo siguiente, no se ajusta a derecho.

OCTAVO: La demandante no se desistió expresamente de su beneficio, pero se entiende que tácitamente se ha desistido, por no señalar oportunamente la fecha en que haría efectiva su renuncia. El bono de incentivo al retiro se ha establecido sobre la base de que quien lo recibe ha renunciado voluntariamente a su cargo y a sus funciones, voluntad que debe expresarse fijando la fecha cierta en que tal renuncia se hace efectiva.



En este caso, se ha establecido que la demandante, encontrándose válidamente notificada, no señaló dentro de plazo la fecha en que haría efectiva su renuncia.

Para situaciones como ésta la ley 20.919 nada ha previsto, pero sí lo hace el reglamento en el inciso tercero de su artículo 16, que señala “Se entenderá que las y los funcionarios que no comuniquen y hagan efectiva su renuncia en el plazo dispuesto en el inciso segundo, se desisten del beneficio, pudiendo volver a postular si así lo desean conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de este reglamento, siempre que cumplan los respectivos requisitos”.

Tal disposición se reitera en el inciso cuarto del artículo 18 del reglamento, en que se lee “Se entenderá que se desiste la funcionaria o el funcionario que no cumple con informar la fecha en que dejará el cargo dentro del plazo dispuesto en el artículo 16 de este reglamento”.

De esta manera, al no haber señalado en qué fecha se haría efectiva la renuncia, debió entenderse que la demandante se ha desistido de su beneficio y, en ningún caso, que ésta debía renunciar hasta noventa días corridos luego del plazo para fijar la fecha para ello, consecuencia postulada por la demandada que no tiene asidero legal.

NOVENO: El término de la relación laboral carece de sustento jurídico y debe ser dejado sin efecto. La demandada ha afirmado que la relación laboral, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 20.919, terminó por el pago de su bono de incentivo al retiro, que se hizo efectivo el 1 de octubre de 2019, mediante depósito bancario que acredita con los comprobantes respectivos y que no ha sido controvertido por la actora.

Por otra parte, la demandada ha señalado que, puesto que se trata de un acto propio de la actora, ésta debe respetar lo acordado en el documento denominado “Término de la relación laboral”, que se ha incorporado en



juicio, más allá de la reserva de acciones que la trabajadora escribió al pie de tal acuerdo.

Examinado el referido documento, se aprecia en su punto primero que el nombramiento de la funcionaria ha terminado “de acuerdo con su renuncia voluntaria”, renuncia que, tal como se ha señalado en el punto anterior, jamás se hizo efectiva.

Por otra parte, el pago del bono se ha ordenado por decreto alcaldicio 1217 de 12 de septiembre de 2019, en relación con la resolución exenta 6637 de 14 de febrero de 2019 del Servicio de Salud del Libertador Bernardo O’Higgins, que aprueba el convenio de 16 de diciembre de 2018, todas ellas fundadas en el supuesto cumplimiento de la ley 20.919 y su reglamento.

Sin embargo, no consta que la Municipalidad haya dado cumplimiento a su obligación establecida en el artículo 7 del reglamento, inciso primero, en cuanto a informar al Servicio de Salud “el listado de todos los funcionarios y funcionarias beneficiarias con el detalle de la fecha en que harán efectiva su renuncia”, puesto que no se entiende cómo pudo informarse respecto a la actora una fecha que nunca fue determinada.

Además, el citado artículo, en su inciso segundo, señala que “La entidad administradora de salud municipal deberá dictar el acto administrativo que corresponda determinando los beneficios de la ley N° 20.919 a que tiene derecho el funcionario y el monto de los mismos. Esta resolución deberá dictarse luego de la aceptación de la renuncia voluntaria tratándose de los funcionarios señalados en el inciso primero del artículo 2°.” El artículo 2, por su parte, estipula quiénes pueden postular al beneficio.

Es decir, el decreto que ordena el pago del bono, materializado con el número 1217 de 12 de septiembre de 2019, sólo podía tener lugar luego de la aceptación de la renuncia de la funcionaria, lo que se hizo en la especie recién por decreto 1265 de 27 de septiembre de 2019 y, además, sin que



existiera una renuncia con fecha cierta que pudiera ser aceptada y, en consecuencia, sin fijar, porque no existe tal antecedente, la fecha en que tal renuncia se ha hecho efectiva.

Por último, habiéndose establecido que debe entenderse a la demandante por desistida de su solicitud del beneficio, correspondía a la demandada informar al Servicio de Salud tal situación, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 18: “El consultorio de Atención Primaria de Salud informará al Servicio de Salud respectivo de tales desistimientos para que éste dé cuenta de manera inmediata a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a fin de que ésta proceda a reasignar el cupo siguiendo el orden del listado contenido en la resolución que determinó los beneficiarios del año respectivo”.

En consecuencia, el otorgamiento del bono a la demandante se basa en una supuesta renuncia voluntaria con fecha cierta, que en este caso no existe, por lo que, siendo el pago de este bono una consecuencia de la renuncia voluntaria de quien lo recibe, éste era improcedente, pues en la especie no concurre tal voluntad y, muy por el contrario, la ley ordena que debió presumirse la voluntad de la actora de desistirse de su anuncio de renuncia y del bono.

Lo anterior vuelve al término de la relación laboral un acto ineficaz, por exclusiva responsabilidad de la empleadora, puesto que se ha omitido en su celebración un requisito esencial para que tenga valor (la renuncia de la funcionaria) y debe, por lo tanto, ser dejado sin efecto, lo que será declarado en lo resolutivo, accediéndose, en consecuencia, a la reincorporación demandada.

De esta manera, el pago del bono, debidamente acreditado con los comprobantes de depósito, tampoco surte el efecto de poner término a la relación laboral, de la forma establecida en el artículo 6 de la ley 20.919, puesto que aquel sólo puede responder a la renuncia voluntaria efectiva de



la beneficiaria, hecho que en la especie no ha acontecido, y que, además, depende de la acabada tramitación del acto administrativo que se dejará sin efecto.

DÉCIMO: No hay extra petita ni ultra petita en lo decidido. La petición de la demandante se ha señalado en términos amplios, aunque algo confusos. Textualmente, se pide que: “ordene mi reincorporación a mis funciones por lo menos hasta el plazo señalado en los artículos 3 inciso final en relación al artículo 6 de la Ley N° 20.919, declarando que tengo derecho a desistimiento, dejando sin efecto tanto el término de la relación laboral suscrito entre las partes y el Decreto Alcaldicio N° 1217, ambos del 30 de Septiembre de 2019, mientras se me notifique la resolución establecida en el artículo 3° en forma legal, con expresa condenación en costas.”

Surge, entonces, a primera vista, el cuestionamiento de si es o no posible en esta sentencia acceder a dejar sin efecto el término de la relación laboral, ordenando la reincorporación de la actora, en las condiciones y por los fundamentos razonados en el motivo anterior.

Llegamos a la conclusión de que aquello es procedente, por las siguientes razones:

En primer lugar, la demandante ha solicitado que se ordene su reincorporación “por lo menos” hasta determinado plazo, lo que habilita al tribunal para acceder a reincorporarla, pura y simplemente, sin la fijación de plazo alguno, pues se extiende que se ha pedido la reincorporación por ese plazo o en forma indefinida.

En segundo lugar, tal como se señaló en su oportunidad, la propia demandada es la que, en su escrito de contestación, ha traído a estrados la alegación de la existencia de una supuesta presunción legal de renuncia voluntaria en determinado plazo, por no haberse hecho efectiva oportunamente, y en esta sentencia hemos debido hacernos cargo de tal afirmación, concluyendo que, por el contrario, lo que se presume es el



desistimiento de la funcionaria al anuncio de renuncia y a la solicitud de otorgamiento de bono de retiro.

UNDÉCIMO: En cuanto a la procedencia, en favor de la actora, de la asignación del artículo 45 de la ley 19.378. El artículo 45 de la ley 19.378 dispone que: “Artículo 45.- Con la aprobación del Concejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios una asignación especial de carácter transitorio. Dicha asignación podrá otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación de salud y fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según las necesidades del servicio. En cualquier caso, dicha asignación deberá adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Esta asignación transitoria durará, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año”.

La redacción del artículo deja de manifiesto que es un bono transitorio, tanto así que es adjetivada en él dos veces como “asignación especial de carácter transitorio” y “asignación transitoria”, señalando, además, que “durará, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año”.

De la lectura de dicha disposición, también queda claro que, en el marco de la función administrativa y los fines que le son propios, las decisiones en cuanto a dicha asignación son facultativas. Se señala que “podrá” otorgarse a los funcionarios y que “podrá” otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación y fijarse de acuerdo por nivel, debiendo entenderse que la facultad de hacerlo implica también la facultad de decidir no hacerlo.

Por último, debe ser aprobada por el Concejo Municipal y adecuarse a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestaria.

DUODÉCIMO: El no otorgamiento a la actora de la asignación del artículo 45 de la ley 19.378 se enmarca en las facultades de la demandada.



Aclarada, en el motivo anterior, la forma en que el bono del artículo 45 de la ley 19.378 debe ser asignada, se vuelve evidente que el hecho de que tal asignación se otorgare durante veinte años a la actora no la transforma de transitoria en un beneficio permanente, ni hace de la facultad de la Municipalidad una obligación en favor de la funcionaria.

Por otra parte, tanto de las declaraciones del alcalde, en su calidad de representante legal de la demandada, como del memorando 140/2020 de 18 de mayo de 2020, exhibido por la demandante, que da cuenta de la nómina de pago de la mencionada asignación, no puede colegirse que tal nominación se haya hecho arbitrariamente, discriminando o buscando el perjuicio de la demandante.

En dicha nómina, además, se aprecia que se han visto favorecidos funcionarios de varias categorías, por lo que no existe razón para extender a todos los funcionarios de una de ellas, lo que constituye, en todo caso, una facultad privativa del municipio.

En consecuencia, la no asignación del mencionado bono a la actora es un acto legal que se enmarca en las atribuciones de la demandada, por lo que el cobro por tal concepto será rechazado.

DECIMOTERCERO: Acoge parcialmente la demanda conjunta, sólo en cuanto al pago de las remuneraciones adeudadas. Puesto que se ordenará el reintegro de la funcionaria, se accederá a lo demandado en cuanto a que deberá pagársele todas las remuneraciones, devengadas desde el término de la relación laboral, que se ha dejado sin efecto, hasta la fecha de su efectiva reincorporación, incluyendo en ellas todas las asignaciones y bonificaciones que le hubieren favorecido de no haber sido desvinculada, con reajustes e intereses.

En lo demás, la demanda será rechazada, atendido lo razonado en el motivo precedente.



DECIMOCUARTO: Intrascendencia del resto de la prueba aportada.

Se han recibido, por una parte, las declaraciones de los testigos Dessy Ibáñez Roja y, Carmen Gaby Osorio si bien fueron muy útiles para ilustrar al tribunal respecto a los mecanismos administrativos propios de las materias de este juicio, no aportan antecedentes relevantes para la determinación de los presupuestos fácticos de las alegaciones de las partes o se refieren únicamente a ellos de oídas.

En cuanto a las declaraciones de Patricia Ema Pichuante Farías y Fermín Carreño Carreño, Alcalde de Peumo, fueron valoradas puntualmente en lo que resultaron pertinentes, de la forma reseñada a lo largo de esta sentencia, y, en lo demás, no se refirieron directamente a asuntos controvertidos.

El resto de la prueba acompañada consistente en contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, comprobante de pago de vacaciones, oficios, notificaciones, Historia de la ley 20.919 y dictámenes de la Contraloría, no aportan información diversa a la ya considerada, se refieren al procedimiento de postulación al bono en aspectos no controvertidos o a asuntos de derecho que fueron dilucidados a lo largo de esta sentencia.

DECIMOQUINTO: Costas. Atendido que la actora se vio obligada a litigar por la desvinculación de que fue objeto y que se dejará sin efecto, la demandada será condenada en costas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 445 del Código del Trabajo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que:

SE ACOGE LA DEMANDA PRINCIPAL, sólo en cuanto se deja sin efecto el término de la relación laboral suscrito entre las partes y el decreto alcaldicio 1217, ambos de 30 de septiembre de 2019, ordenándose la reincorporación de la demandante a su cargo y labores que desempeñaba



con anterioridad a su desvinculación, tan pronto como se certifique la ejecutoriedad de esta sentencia.

SE ACOGE LA DEMANDA CONJUNTA, sólo en cuanto la demandada deberá pagar a la actora todas las remuneraciones devengadas desde el término de la relación laboral, que se ha dejado sin efecto, hasta la fecha de su efectiva reincorporación, incluyendo en ellas todas las asignaciones y bonificaciones que le hubieren favorecido de no haber sido desvinculada, con intereses y reajustes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo.

SE CONDENA EN COSTAS A LA DEMANDADA, fijándose las costas personales, prudencialmente, en la suma total de **\$500.000 (quinientos mil pesos)**.


No existen costas procesales que tasar.

Regístrese y archívense los antecedentes, en su oportunidad.

Quedan las partes notificadas en este acto, sin perjuicio del envío de copia de esta sentencia a su correo electrónico.

RIT O-85-2019

Dictada por **Felipe Cancino Concha**, Juez Interino.

 1940231388-1-113 O-85-2020





A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>